DIARIO

DE LAS

SESIONES DE CORTES.

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR REY.

SESION DEL DIA 6 DE ENERO DE 1822.

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior.

Se dió cuenta de un oficio del encargado del Despacho de la Secretaría de Hacienda, con que remitía 200 ejemplares del decreto sobre prohibicion de entrada de libritos de paues de oro fino extranjero; y las Córtes quedaron enteradas, mandando repartir dichos ejemplares á los Sres. Diputados.

Mandóse asimismo pasar á la comision de Guerra un expediente remitido por el Secretario del Despacho de este ramo, de órden del Rey, para conocimiento y resolution de las Córtes, en que se consultaba si el artículo 131 del capítulo VII del decreto orgánico del ejército, que permite á todo oficial contraer matrimonio á los seis años de servicio sin necesidad de Real licencia, ni más requisito que los demás españoles, era extensivo á los oficiales de guerra de la armada y á los del cuerpo político de ella.

A las comisiones reunidas de Hacienda y Visita del Crédito público pasó una solicitud de D. Juan Mauricio Tejero, ex-regular de la extinguida Orden hospitalaria de San Juan de Dios, pidiendo á las Córtes que mandasen se le librase la certificacion de capitalizacion,

suspendida con motivo del acuerdo de las mismas, ó que se le pusiera corriente su asiento como lo tenia anteriormente, y se le reintegrasen los trimestres que no habia percibido desde que instauró la pretension de dicha capitalizacion de la pension que disfrutaba.

Quedaron las Córtes enteradas de la exposicion del ayuntamiento de la villa de la Balsa de Bes, en la provincia de Chinchilla, dando gracias á las mismas por haber elegido á dicha ciudad por capital de la referida provincia.

Se leyó y mandó dejar sobre la mesa el dictámen de las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio sobre la modificacion que deberá hacerse en los aranceles con respecto á la isla de Cuba.

Continuó la discusion que quedó pendiente en la sesion de ayer, acerca del dictámen sobre la proposicion del Sr. Lopez Constante, de que se dió cuenta en la del 29 de Diciembre último, relativa á que no se perjudicase en nada á los interesados de los medios luises que con arreglo al decreto de 19 de Noviembre pasado los hubiesen entregado en las Casas de Moneda: opinando la comision que ni en los gastos de resello, ni en los maravedís que se pierden por no tener los medios lui-

ses la décimasétima parte del metálico, debe cargarse á la Nacion; y por lo mismo que no ha lugar á votar dicha proposicion. Acerca de lo cual dijo

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Es muy fácil, señores, extraviar una cuestion, si se quiere divagar á cosas que no tienen conexion con ella, pero que tocadas no pueden menos de dejar cierta impresion, y no favorable ciertamente al objeto principal. Para desvanecer la que pudieron dejar las expresiones dichas por el Sr. Gonzalez Allende en la sesion de ayer, tomo únicamente la palabra; y ya que hablo, me haré cargo de algunas objeciones que contra el dictámen han puesto otros señores que tambien lo impugnaron.

La Casa de Moneda, dijo el Sr. Allende, despues de ser satisfecha por los particulares de los gastos de resello, solicita ahora hacer una sustraccion del valor de los medios lises presentados, que unida á las ganancias que ya tiene en virtud del decreto de 25 de Junio, las aumenta en una cantidad exorbitante, y al efecto ha presentado como ciertos una porcion de cálculos de que hace partir su asercion. En primer lugar, la casa no pide ni ha pedido nada; son los particulares, ó mejor hablando, á nombre de estos y en su representacion, reclaman los regidores de esta córte, individuos de la comision de recibo, y el Sr. Lopez Constante, el que los tenedores de medios lises no pierdan cosa alguna. Los cálculos del Sr. Gonzalez Allende parten de un falso principio, y se han formado como si no hubiese una ley, dada al fin de la legislatura pasada, que regula el tanto que han de cobrar las casas por amonedacion; y como en virtud de esta disposicion hayan sido anulados los reglamentos antiguos en la parte que hablan de esto, y en ellos se haya apoyado S. S. para calcular, tienen las Córtes desvanecido uno de sus argumentos, que aun cuando nada tiene que ver con lo que hoy tratamos, no puede quedar sin respuesta. Si á esto añado que las casas de moneda llevan por el resello de medios lises la mitad menos que en toda acuñacion por la habilitacion de los cospeles, y que éstas han de dar una cuenta exactisima de todo lo que reciben, la cual está ya intervenida doblemente por el ayuntamiento y Tesorería, que abonan el valor de la moneda con toda exactitud por peso, y no por cuenta, y que la rapidez de la operacion impide ciertas minuciosidades de las que el Sr. Gonzalez quiere sacar muy grande partido; si añado, en fin, que esta misma rapidez causa el mayor dispendio y costos por todos los conceptos, creo se persuadirán las Córtes de que las ventajas y ganancias pueden no serlo, sino todo lo contrario.

Para evitar esta ganancia, y para que los particulares fuesen mejor indemnizados, desearia el Sr. Gonzalez que se hiciesen ensayes de todas las piezas. Sí, cual quiere S. S., hubiera de suceder, valdrian más que las piezas los ensayes, porque cada uno, siendo de plata, cuesta 11 rs., si no me equivoco. Por esto, y por que si se habian de recibir de este modo, tendríamos medios lises para muchos años, se reciben *al toque*, operacion sencilla y suficiente.

Otra equivocacion ha padecido, presentando á la Casa de Moneda como infractora de la ley, por recibir medios lises al precio de 75 rs.; y como esto sea preciso ponerlo en claro, debe saberse que la ley de 25 de Junio prevenia que la plata de 12 dineros se pagase á 182 rs., y 17 maravedís. Y si la de los medios lises no llega sino á 10 $\frac{1}{2}$. ¿á cuánto deberá pagarse? Saque la cuenta S. S., y verá si la del establecimiento está conforme ó no, y solo entonces se diga que en esto ha

procedido mal. La Junta directiva hubiera faltado sin duda, pagando lo que el Sr. Allende queria, porque una plata de más baja ley que de 12 dineros hubiera subido al precio de la suprema. Y de paso debo decir, que esto es tanto más justo, cuanto que los medios lises que se toman despues del 1.º de Enero, van á la fundicion, y no á acuñarse.

Dadas estas explicaciones, vamos á la cuestion, que por ninguno se ha presentado en su verdadero punto de vista, sino por el Sr. Alaman. Lo que hoy se hace en la Casa de Moneda está ya comprendido en el decreto, que fijó el término de la circulacion de moneda francesa.

Sí, Señor. ¿Qué se promete en él? Por un artículo pagar los melios lises á razon de 167 $\frac{1}{2}$ rs. el marco; y por otro se dice que la indemnizacion del valor nominal se hará tomando la base de 17 al marco. ¿Se cumple esta disposicion? ¿Se cumple en todas sus partes? En la primera, dando á cada uno de los que han presentado medios lises 167 $\frac{1}{2}$ rs. por cada marco sin quitar un ochavo; y con esto deshago una equivocacion que se ha padecido por algunos señores, como si el 2 $\frac{1}{2}$ por 100 se sustrajese de esta suma. ¿Y la segunda parte? Lo mismo se cumple, ó se cumplirá cuando se den los billetes, dando 17 rs. en papel moneda por cada marco de medios lises, entren muchos ó entren pocos: saludable medida, con la cual hemos evitado el desgaste y falsificaciones que en otro caso se hubieran hecho. ¿Qué es, pues, lo que se pide? Lo contrario de lo que las Córtes resolvieron ya, es decir, que en el papel moneda se aumente el valor de 167 $\frac{1}{2}$ rs. hasta 170 que valian los medios lises, segun los ensayes que se hicieron; y para esto se apoyan los señores de contrario dictámen en el art. 4.º Pero esto no tiene valor alguno. El art. 4.º fué la regla general; pero se modificó en los dos de que he hablado, en los cuales se dice con cuánto y cómo se habia de indemnizar á los particulares. Si los Sres. Diputados hubiesen examinado con atencion el discurso preliminar de la comision, en donde se daba á entender que los particulares tendrian el menor quebranto posible; si hubiesen examinado qué quebranto era este; si hubiesen tratado de analizarle para ver en qué consiste, ó sin hacer esto hubieran preguntado á la comision qué era esto, hubiera contestado como lo hizo con el Sr. Lopez Constante, satisfaciendo una duda muy parecida á esta: hubiera dicho que nacia de la diferencia de 167 $\frac{1}{2}$ rs. á 170 que arrojaban de valor los medios lises; hubiera dicho que esta era una pérdida convencional entre la Nacion y los tenedores; hubiera dicho que se fundaba esto en el desgaste general, el que impedia que llegasen á la totalidad del marco los 17 medios lises, que sirven á la base del cálculo, que se fundaba en la conveniencia que se proporcionaba á los tenedores de no desecharles una moneda que en más de una mitad carecia de signos, por lo cual no podia admitirse su circulacion por ninguna ley, y que además se daba en compensacion la facultad de extraer la no conocida hasta ahora. En fin, hoy dice la comision lo que entonces hubiera callado, porque ya espiró el término de recibir; á saber, que por este medio indirecto esperaba se extrajesen para el extranjero, ó se fundiesen por la buena calidad de esta plata algunas sumas considerables, como así se ha realizado con grande satisfaccion de la comision, la cual en todo esto no ha llevado otro objeto que el de conciliar el bien de los tenedores con algun alivio de la Nacion, que sufre todos los efectos de una operacion tan grande, ménos en una pequeña parte.

Y no se diga que en esto se propuso á las Córtes una medida injusta, como indicó el Sr. Alaman. La justicia de las naciones sabe muy bien S. S. que estriba en otras bases que la de los particulares, y que la conveniencia general hace su lugar ó se confunde con aquella. Esto es en el caso de que no hubiera los razonables motivos en que se apoyó la comision para proponer el decreto cual lo votaron las Córtes. Pero este asunto ya no es de la discusion de hoy: si en el dia en que se trató del decreto se hubiese tocado este punto, se habrian dado las explicaciones que he dicho; explicaciones hijas de un muy detenido exámen, y de muchas conferencias á que asistieron los individuos de la Casa de Moneda, y algunas personas de la mayor inteligencia, entre las cuales estuvo el tesorero de las Córtes, D. Santiago Aldama, quien ha sugerido á la comision ideas muy oportunas sobre el asunto. En fin, señores, ya nada falta que explicar: lo que las Córtes mandaron se cumple exactamente, pues que á todos se abonaron los 167 $\frac{1}{2}$ reales al marco, y además 17 reales en papel moneda, como se manda en el decreto; con lo que contesto al señor Gasco, que deseaba saber en qué artículo se ordenaba hacer la sustraccion del 2 $\frac{1}{2}$, y digo á S. S. que en los dos que he citado; y como estos prefijen la cantidad que ha de darse por cada marco de plata, así en papel como en moneda, se dispone por consecuencia que no se dé más. Concluyo, en fin, con hacer dos observaciones: primera, que lo que se abona á los tenedores de los medios lises, mucha parte de ellos especuladores, ha de cargarse en el presupuesto del año viniente, aumentándose más y más las contribuciones: segunda, que las ocurrencias de Vizcaya han puesto á las Córtes en el caso de tomar alguna disposicion, bien de próroga ó de otra cosa equivalente, con lo que quizás se neutralizaria esta grande operacion, que hará siempre honor á las Córtes, pues que se llevarán, sin duda, en tal caso á aquel país muchas cantidades que aquí han quedado sin entregar para hacer especulaciones.

Hecha ya esta explicacion, las Córtes resolverán lo que juzguen mejor, pues que la comision no tiene empeño alguno; y si pudiera caber en el ánimo de sus individuos el desear alguna cosa, sería ciertamente todo lo contrario de lo que propone, porque esto haria menos difícil una operacion tan importante y tan combatida en este mismo lugar. Pero el bien de la Pátria es antes que todo, y hubiéramos faltado á nuestro deber si nos hubiésemos explicado de otro modo.

El Sr. **ALAMAN**: Rectificaré algunos hechos. El Sr. Lopez me ha hecho el honor de decir que establecí la cuestion bajo su verdadero punto de vista; pero que, á pesar de esto es asunto ya resuelto por las Córtes en el decreto de que se trata. Eso es decir que no la presenté efectivamente bajo su verdadero punto de vista, ó que no la entendí. Aquí hay dos cuestiones. Una: los tenedores ¿sufrirán los gastos del resello? Otra: ¿sufrirán los tenedores la disminucion que se supone en la moneda con respecto á la base acordada? En cuanto á los costos de acuñacion, parece que no debe confundirse una cuestion con otra, porque no hay justicia ninguna para cargarlos. (*Reclamó el Sr. Lopez (D. Marcial) que ya no era rectificacion de hechos, sino entrar de nuevo en la discusion, y continuó el orador.*) Para que no se diga que entro de nuevo en la discusion, pido que se lea la representacion de los comisionados por el ayuntamiento de Madrid.)

Leyóse, y á continuacion dijo

El Sr. **PEÑAFIEL**: Las Córtes acaban de oír lo que

dicen los comisionados del ayuntamiento de Madrid y apoya el Sr. Alaman, esto es, que además de los 167 $\frac{1}{2}$ reales que se abonan por cada marco de plata, se abone asimismo todo el resto del valor nominal de todos los medios lises en billetes contra Tesorería. Pues lo que resultaria de esto sería que pudiendo desgastarse esta moneda conservando todavía el valor nominal, puesto que no tiene caracteres de tal, los tenedores de ella podrían sacar ventajas en grave perjuicio del Estado y en premio de la mala fé.

Porque uno que tenga 18 medios lises que pesen más de un marco, puede quitarles la plata excedente con ácido nítrico ú otra cualquiera cosa, y despues de quedarse con una porcion de plata, podrá pedir en la Casa de Moneda, además de los 167 $\frac{1}{2}$ rs. del marco, á cuyo peso los redujo, no solamente los 17 rs. que se abonan por marco en billetes contra Tesorería, que es lo prevenido en el decreto, sino todo lo restante hasta 199 rs. y 2 maravedís, que es el valor nominal de 18 medios lises; es decir, 14 rs. y 19 maravedís más de lo que se manda en el decreto. Lo que digo de 18, puede hacerse con 18.000; pero hablo de 18 por la facilidad del cálculo, que volveré á repetir: 199 rs. y 2 maravedís es el valor nominal de 18 medios lises; si se ha de conservar este valor nominal á todas las monedas desgastadas aunque no conserven los signos prescritos en la cédula del año 18, se abonarán 31 rs. y 19 maravedís en billetes, que es la diferencia de 167 $\frac{1}{2}$ rs. á 199 y 2 maravedís. Esto es lo que se quiere; pero esto es justamente lo que han tratado de evitar las Córtes cuando decretaron en el art. 13 que se girase la cuenta en las Casas de Moneda, á razon de 17 rs. al marco.

La comision se hizo cargo de que esta clase de moneda se ha desgastado mucho desde el año 18, solamente con el uso, porque siendo tan lisa se roza por todos los puntos de su superficie; y si despues de la Real cédula que fijó su valor ha habido la buena fé, ó la necesidad de recibirla sin pesarla, no obstante de que ni en el reverso ni en el anverso tiene los signos que aquella prescribe, los tenedores deben imputarse á sí mismos la culpa; porque para resarcir el perjuicio que pueda ocasionarles esto que se llama buena fé no se ha de abrir una puerta tan ancha como la que se quiere al fraude y al crimen. Y pregunto yo: los que con 16 monedas ó 16 y media componen un marco de plata, ¿perdonan algo de los 17 rs. que por aumento del valor nominal se abonan á cada marco? De ninguna manera. Para estos está muy claro el art. 13; pero no lo está para los que ajustan aquel peso con 17 monedas y media ó 18, y por eso se acojen al art. 4.º

Ya dije ayer que segun el término medio que presentaban todos los datos que ha recibido la comision de la Casa de Moneda, no escogiéndose los medios lises, correspondian 17 al marco, y que siendo su valor nominal 184 $\frac{1}{2}$ rs. y abonando la Casa de Moneda 167 $\frac{1}{2}$ reales por la plata y 17 rs. en billetes contra Tesorería, resultaba una pérdida al tenedor de 3 $\frac{1}{2}$ rs.; pero estos 3 $\frac{1}{2}$ rs. no son por 100, sino es por marco, que vienen á ser 2 por 100 escasos; y para abonar estos 167 $\frac{1}{2}$ reales al marco se ha considerado la plata como moneda en la mitad del costo de su fabricacion, porque no vale como pasta más que 165 rs. reducida á la ley de 12 dineros, y esto con el beneficio del decreto de las Córtes que abolió el derecho de señorcaje que cobraban antes las Casas de Moneda.

Así, pues, segun esa representacion que se acaba de leer, verán las Córtes que lo que se quiere ahora por los

señores que impugnan el dictámen, es enteramente contrario á lo que las mismas Córtes han decretado, y que en lugar de ser un borron, como dice el Sr. Alaman, la aprobacion de aquel, lo seria el desaprobalo, porque tolerarian las Córtes que todos los medios luisés desgastados por el uso ó por el fraude recibiesen indistintamente por aumento del valor nominal, en lugar de 17 rs. al marco, que es lo que se decretó, 31 y 19 maravedís, que es la diferencia de 167 $\frac{1}{2}$ rs. á 199 y 2 maravedís en cada 18 medios luisés, y todavía seria mayor el quebranto para la Nacion desgastándolos de modo que se necesitasen 19. Las Córtes ven que esto no puede ser.»

Declarado el punto suficientemente discutido, y que habia lugar á votar, se leyó á peticion del Sr. Gasco el art. 4.º del decreto de 19 de Noviembre último y el artículo 13 del mismo reclamado por el Sr. Peñafiel, despues de lo que se votó el dictámen y quedó aprobado.

A continuacion presentó el Sr. Alaman la proposicion que sigue:

«Pido á las Córtes se sirvan resolver que á los empleados, funcionarios públicos, corporaciones y particulares á quienes en el mes de Diciembre último se ha pagado en medios luisés, se les abone 2 $\frac{1}{2}$ por 100 sobre las cantidades que hayan percibido, en justa satisfaccion del descuento que han sufrido.»

Para apoyarla dijo

El Sr. **ALAMAN**: De la discusion anterior resulta que los tenedores de medios luisés sufren un descuento de 2 $\frac{1}{2}$ por 100 á su presentacion. Es indudable tambien que en el mes anterior casi todos los pagamentos hechos por Tesorería se han verificado en medios luisés, y medios luisés desgastados como estaban en circulacion en el comercio, y como los recibia y pagaba la Tesorería. Ahora bien, para fundar mi proposicion no necesito más que hacer un sencillo argumento. Estos empleados ¿tenian un derecho á que se les diese el montante de sus sueldos íntegro? Es indudable. ¿Han recibido este sueldo íntegro, puesto que se les ha pagado en una moneda en que han sufrido 2 $\frac{1}{2}$ por 100 de descuento? Tambien es indudable que no. Luego la Nacion está obligada á satisfacer este descuento que ella les ha hecho; porque si los empleados tienen derecho á percibir el sueldo, y no se les ha pagado, la Nacion tiene obligacion á satisfacerles la diferencia que resulta entre el valor de la moneda en que se les pagó, y el que tienen ahora por este quebranto. La Nacion les pagó en una moneda que les dijo: «vale tal cantidad,» y luego esta misma Nacion los obligó á perder el 2 $\frac{1}{2}$ en esta moneda: por esta razon pido que esta proposicion, que me parece de toda justicia, se admita á discusion. El único reparo que puede ponerse es que acaso no se consideraran las Córtes, como extraordinarias, con facultades para tomarla en consideracion; pero como no es más que un incidente del asunto de que se han ocupado, y tenemos ya dos ejemplares, uno en este mismo asunto, que es la organizacion de las Casas de Moneda que no estaba señalada, y sin embargo, se discutió, y el otro la reforma de las Contadurías de propios y arbitrios de que se trató como incidencia de la division del territorio, creo que no haya inconveniente en que se tome en consideracion.»

Habiéndose preguntado si se admitia á discusion la proposicion anterior, se resolvió que no.

Dióse cuenta del dictámen siguiente, presentado por las comisiones de Hacienda y Division del territorio:

«Las comisiones de Hacienda y Division del territorio español, en vista de las observaciones que se hicieron en la discusion del art. 22 que las Córtes se sirvieron mandar pasar á las mismas, y con presencia de las proposiciones que hicieron varios Sres. Diputados, sometien á la deliberacion de las Córtes los artículos siguientes:

Art. 1.º Las dotaciones para el gobierno superior político de las provincias, por ahora, y hasta que se haga un arreglo general de los sueldos de todos los empleados públicos, serán los que expresa el estado número 1.º que acompaña (*Véase la sesion del 26 de Diciembre último*).

Art. 2.º Aunque algunos individuos hayan disfrutado mayores sueldos que los asignados en el artículo anterior, y sigan conservando los mismos destinos, no cobrarán otro que los detalla los en el artículo antecedente.

Art. 3.º La provision de los 17 oficiales primeros que se necesiten de más por el aumento de 17 provincias, recaerá en los oficiales sobrantes que resulten á consecuencia de lo dispuesto en el art. 1.º

Art. 4.º Los restantes oficiales, escribientes y porteros se distribuirán por el Gobierno en las Secretarías de los Gobiernos superiores políticos, observando lo que previenen los artículos siguientes.

Art. 5.º Para cada oficial que se aumente se rebajarán de la asignacion de gastos expresada en el estado número 1.º 8.000 rs., 4.000 por un escribiente y 2.000 por un portero, y esta y no más será la dotacion que disfruten estos individuos.

Art. 6.º Ninguna de estas plazas se proveerá en lo sucesivo; pero se reintegrará la dotacion de gastos de la secretaria donde ocurra la vacante, con 8.000 rs. si fuere de oficial, 4.000 si fuere de escribiente, y 2.000 si de portero.

Art. 7.º Si los empleados excedentes de que hablan los artículos anteriores, no merecieren la confianza de los jefes políticos á cuyas órdenes se hallen destinados, por ineptitud ó inaplicacion, lo avisarán al Gobierno, exponiendo las razones en que apoyen su opinion: éste oirá al interesado y en el caso de hallar justa la reclamacion del jefe político, mandará su separacion del servicio sin goce ninguno de sueldo.»

Habiéndose declarado que habia lugar á votar en su totalidad el anterior dictámen, fueron aprobados sin discusion los cuatro primeros artículos, diciendo sobre el 5.º

El Sr. **CLEMENCIN**: Cuando al principio de la discusion acerca de la division territorial de la Península tuvo la comision el honor de hablar á las Córtes, el principal argumento que se hacia contra el proyecto presentado por ella era la falta de economía. Esto se dijo de muchas maneras; se hicieron reflexiones; se presentaron estados, y se decia en aire de triunfo: este argumento no tiene réplica; á esto no se ha respondido ni se responderá. Pero el progreso, y sobre todo el estado actual de la discusion, ha satisfecho completamente á ese reparo, y ha desarmado del todo á sus autores. Ya no hay falta de economía: los gastos del gobierno político de las provincias son menores que las cantidades señaladas en el presupuesto para este ramo: desaparecieron aquellos ocho millones de aumento, que segun se dijo repetidas veces traia consigo el nuevo proyecto de division territorial, y el resultado es que habiéndose aumentado el número de provincias desde 34 á 52, el gobierno político superior de éstas cuesta un millon menos que el de las 34. Asi se ve patentemente por el estado

que la comision presenta hoy á las Córtes. Esta disminucion de gastos no se ha verificado solo en el ramo político. Dijo la comision en los principios de la discusion que los demás ramos administrativos del Estado habrian de ir á buscar la division territorial, y arreglarse á ella como base física y fundamento de todo: quede aquí nacera la sencillez y el órden, y por consiguiente la economía. Este anuncio ha empezado tambien á verificarse. La division militar del territorio, arreglada á este sistema de division política y aprobada ya por las Córtes, ha presentado nuevos ahorros; iguales ahorros se presentarán en la aplicacion de estos principios al sistema de Hacienda, como dentro de pocos dias tendrán el honor las comisiones de manifestarlo á las Córtes: por consiguiente la cuestion está resuelta, y parece que no hebe hablarse ya más en la materia. Las Córtes en el mes de Junio señalaron para los gastos del gobierno político la cantidad de siete millones; en el dia se presenta un presupuesto con un millon menos de coste: no se puede hacer más, y creo que no hubiera debido esperarse ni aun tanto. Las comisiones ofrecen á la deliberacion de las Córtes en el dictámen que acaba de leerse un proyecto menos dispendioso todavía que otros que se indicaron como más económicos que el primitivo de la comision de territorio, porque no deja cesantes como aquellos sin que por eso crezcan los gastos. Este ahorro no solo consta de las cantidades que debian invertirse en los sueldos de los cesantes que habian sido nuevamente empleados en el gobierno político provincial, sino tambien de los cesantes de otros ramos que se habian destinado al gubernativo. Además, las comisiones han procedido en esto con una circunspeccion y consideracion que en su juicio son muy propias de las circunstancias. Se ha propuesto que no haya cesantes, para evitar el descuento que podria producir en los empleados de este ramo la declaracion de que quedaban sin empleo. Esta consideracion es más esencial en este ramo que en otros, porque en él han podido observarse con más puntualidad las leyes dictadas para que al dar los empleos atienda muy particularmente el Gobierno en los provistos á la adhesion al sistema constitucional manifestada por pruebas positivas.

Como los establecimientos del ramo político son nuevos, no ha habido en él los obstáculos y dificultades que en otros para el cabal cumplimiento de lo resuelto por las Córtes; y resulta que entre estos empleados se ven patriotas distinguidos por su amor á la libertad y por los servicios que han prestado al restablecimiento del régimen constitucional. El disgusto de estos beneméritos empleados se evita por el medio que las comisiones proponen.

Deshecho y reducido á la nada el argumento sacado de la falta de economía, se ha tomado otro camino para contradecir la planta y propuesta para el gobierno político de las provincias. Se ha dicho y se ha querido probar con declamaciones y cálculos, que la Nacion está tan escasa, está tan pobre que no puede soportar ni aun estos gastos. No dudo de la buena y recta intencion de los Sres. Diputados que han hablado de esta materia; pero creo que el celo los ha llevado más allá del término que debieran proponerse. Tanta ponderacion de pobreza y de miseria es perjudicial para el crédito de la Nacion dentro y fuera: fuera, por el perjuicio que puede traer á sus relaciones mercantiles y aun á sus mismas relaciones políticas; dentro, porque produce el desaliento, y porque los enemigos del sistema pueden valerse de estas mismas expresiones de los Sres. Diputados para im-

putar maliciosamente al régimen constitucional los daños que en todo caso no pueden ser nacidos sino del des-gobierno precedente en otras épocas calamitosas. Al oír hablar de esto á algunos señores, no pareciera sino que la Nacion estaba en absoluta imposibilidad de mantener su Gobierno y de continuar en estado de Nacion constituida é independiente. Hubo algun Sr. Diputado que comparó á este proposito las entradas actuales en el Erario con las de otros tiempos; y ciertamente estando á sus cálculos y guardando consecuencia tendria que decir que las dotaciones de los jefes políticos de algunas provincias no debian pasar de 5 á 6.000 rs. Esto es mucha exageracion. Un país que goza de un clima como el nuestro, de una fertilidad cual ningun otro de Europa, y cuyos habitantes están dotados del ingenio, aptitud y otras prendas que nadie puede dejar de reconocer en los españoles sin agraviarlos, ¿cómo puede llegar á tal extremo de miseria? Esa suma y sórdida pobreza solo puede haberla en las naciones que gimen bajo el despotismo, y no como quiera, no el despotismo europeo, en que la civilizacion y las luces no permiten los excesos de la barbárie; era menester que fuese el de los berberiscos, de los mandingos ó de los cafres. La ilustracion y la libertad son el verdadero origen de la riqueza; y España, que ya no puede ser esclava ni lo será jamás, reúne muchos elementos del saber con otros elementos materiales de prosperidad que á la verdad no están desenvueltos todavía, como lo estarán más adelante, pero que excluyen el estado absoluto de miseria en que equivocadamente se la supone.

En esta cuestion se ha confundido por muchos, y aun por algunos Sres. Diputados, el estado económico de la Nacion con el de su Tesorería. Es muy posible que una nacion sea más rica que el Erario, así como tambien es posible que el Erario sea por algun tiempo menos pobre que la Nacion. Son varias las causas que influyen en el actual estado de escasez que sufre nuestro Tesoro: algunas se han mencionado ya en el Congreso, y por lo tanto excuso repetir las; pero todavía me parece que no se ha dicho con la debida expresion y claridad una de las principales en mi concepto, y por de pronto la de efectos más inevitables, á saber: las novedades hechas en nuestro sistema de Hacienda. Nadie ignora que las variaciones en el ramo económico de la Administracion, aunque fundadas en principios ilustrados y justos, aunque dirigidas á mejorar el estado ulterior de los pueblos, producen siempre en el Tesoro un vacío que no se repone sino con el tiempo, hasta que, vencidas las dificultades que siempre acompañan á las nuevas instituciones, y formadas las habitudes de administradores y administrados, empiezan á experimentarse los beneficios. Mas el estado de languidez y decadencia de nuestro Erario no se aplica con exactitud al de la Nacion en que los manantiales de la riqueza, lejos de anunciar disminucion y atrasos, muestran, por el contrario, una tendencia visible á sus aumentos. Para convencerse de ello basta dar una ojeada rápida sobre el estado y progresos de nuestra industria agraria y fabril. Hace veinte años que la venta de las fincas de fundaciones y obras pías empezó á dar un grande impulso á nuestra agricultura: se aumentó la propiedad, se mejoraron las labores, se pusieron en movimiento los capitales. Durante la guerra de la Independencia se aumentaron las ventajas con la enajenacion que hicieron los pueblos de los terrenos de sus propios y baldíos: se labraron ó plantaron campos antes incultos y estériles; se extendió la práctica del riego; se construyeron edi-

ficios rústicos. Las leyes dictadas por las Córtes actuales sobre la desamortizacion civil y eclesiástica, aumentando y dividiendo la propiedad, infunden las más lisonjeras y fundadas esperanzas, sin que sea posible calcular hasta qué punto llegará el incremento y prosperidad de nuestra agricultura en lo sucesivo.

Es error vulgar el creer que la riqueza de una nacion está cifrada en la moneda, y es muy posible que una nacion tenga menos dinero y sea más rica que otra. El dinero es parte de la riqueza, pero no toda la riqueza, ni aun el signo de ella, como saben hasta los aprendices de la ciencia económica. Juzguemos más bien en esta materia por los productos generales del trabajo y de la industria, y aun por la direccion á crecer y aumentarse. Esta es visible respecto de nuestra agricultura. Yo pudiera hablar de las útiles tareas de nuestras Sociedades Económicas, como tambien de los nuevos arados y máquinas, de la hidrópota que anuncian los periódicos de Cataluña, de las eras artificiales de invierno ideadas por nuestro digno compañero el Sr. Alvarez Guerra; pero lo omito porque hasta ahora son solo teorías, aunque siempre indican una afición general á este importante estudio que no puede menos de producir resultados favorables. Pudiera asimismo hablar de la explotacion del carbon de piedra que recientemente ha empezado en algunas partes, y que crecerá bajo los auspicios de los decretos dados por las Córtes. Otras mejoras hay más visibles y ya realizadas, como el uso del trillo de Errasti y el del arado ú horiati valenciano que vemos trabajar en los contornos de la córte en las labores de primavera con tanto beneficio de las tierras como aumento de sus productos. Al uso de este método, que formará época en la historia de la agricultura, acompaña necesariamente el de sembrar por bandas, en que se logran las ventajas de la multiplicacion de las labores y la economía de las semillas. No hablaré en particular de la alternativa de cosechas, introducida modernamente en nuestra agricultura, y que se generaliza más cada día; alternativa que ha producido la abundancia de legumbres y cereales, así como ésta ha producido los aumentos visibles de animales de labor y domésticos de todas clases, parte muy esencial de la riqueza agraria: no hablaré de la rapidez con que en el centro de la Península se ha extendido y continúa extendiéndose el cultivo de la patata, planta preciosa que hace desaparecer el temor de las carestías y hambres espantosas que de otros tiempos nos refieren las historias: no hablaré de la extension que nuevamente ha adquirido el cultivo del maiz y de varias especies de cereales que han dado materia á la *Ceres española*, obra del benemérito profesor D. Mariano Lagasca, inédita todavía, pero que dará mucho honor á la Nacion cuando se publique: no hablaré de la introduccion del cultivo del algodón en nuestra costa del Mediterráneo, desde Motril hasta Elche, ni de los progresos del cultivo del cáñamo en Granada, de que hemos visto muestras y que han dado ocasion á los benéficos decretos de las Córtes sobre la materia, ni de los nuevos y considerables plantíos de olivos y frutales en nuestras provincias mediterráneas, ni de los de viñedos en todas partes y señaladamente en Cataluña, Aragon y Andalucía; pero es indudable que el conjunto de todas estas mejoras manifiestan que nuestra agricultura no está en el grado de decadencia que se supone, sino que, al contrario, crece con muestras é indicios muy claros de mayores aumentos.

Si de la agricultura pasamos á las industrias de otras

clases, son evidentes y notorios los progresos del arte de la destilacion de aguardientes, ramo sumamente importante en España, que puede mirarlo como un manantial peculiar suyo de riqueza, en que no debe haber nacion que le compita. La introduccion del aparato de Azcorbe y la perfeccion de los intruementos y de la maniobra, han fomentado la perfeccion de esta industria en Rioja y en Cataluña, señaladamente en Reus, villa que en este y otros puntos es un modelo de actividad y de inteligencia. En tiempos pasados se veian compañías de extranjeros que establecian por su cuenta fábricas de aguardientes en las provincias de la Península en que abunda la viña. Estas han desaparecido, sucediéndoles las nacionales, que van aumentándose. En nuestras fábricas de paños de Segovia, Ezcaray, Tarrasa, Alcoy y otras se han adoptado las máquinas flamencas de cardar é hilar, que tanto contribuyen á la perfeccion y baturatura de los productos industriales. En Bilbao se ha establecido estos últimos años un depósito de juegos de máquinas de esta clase, procedentes de la fábrica de Cocqueret, que es indicio seguro de la demanda que se hace de ellas y de los progresos de nuestras manufacturas de lanas. Así se ve que los paños de ciertas clases y colores empiezan á no tener ya bastante salida entre nosotros; y yo sé de la existencia de algun proyecto para entablar este comercio en las escalas de Levante. En los alborotos de Alcoy que el año pasado ocuparon la atencion de las Córtes, tienen estas la prueba de los progresos de sus fábricas; porque los alborotos nacieron del descontento de una gran multitud de jornaleros, excitado como ha sucedido repetidas veces en Inglaterra, por la simplificacion de la maniobra, de que los jornaleros son enemigos naturales. En Madrid se han hecho ensayos para fabricar estas máquinas de cardar é hilar lana, por direccion de los beneméritos Peñalver y Sureda. Otros ramos dan tambien esperanzas de adelantamiento. Las fábricas de seda, industria antigua en España y muy floreciente en otros tiempos, pueden prometerse muchas ventajas del torno inventado por Regas, y del método de hilarla en frio, introducido por el mismo. Prosperan las fábricas de lonas y otras telas de cáñamo en Granada y Cervera; las de gorros y medias en Cataluña; las de medias de telar en Castilla; las de papel en varias partes del Reino. En Sevilla, Ronda, Extremadura, Vitoria y Valladolid crecen y se perfeccionan las fábricas de curtidos; y en las cercanías de Madrid, la de Pozuelo da, entre otros productos, excelentes tafletes. Lo mismo puede decirse de las fábricas de sombreros, aventajándose singularmente la de la Coruña; y ya apenas se ve un sombrero extranjero, cuando no muchos años há no se hacia uno decente en España. La fábrica de loza de Alcora ha empezado recientemente á corregir los defectos que la tenian desacreditada, y se han establecido nuevas fábricas de un ramo tan necesario, en Menasalbas, Bechi, Sargadelos y en Rioja, sin contar la que dirige en Madrid el célebre Sureda. En la fábrica de Puidu les se tiran de algun tiempo á esta parte con mejoras las planchas de plomo. La ebanistería hace tambien progresos, siendo muy notable la máquina de aserrar maderas finas establecida en su taller por D. Luis Negro, artífice tan recomendable por su habilidad como por su patriotismo, de lo que tienen pruebas las Córtes. Yo bien sé que no todos estos adelantos son iguales, ni tienen el mismo mérito é importancia, y que algunos son todavía poco más que tentativas y ensayos; pero esto basta para mi intento, porque yo no me he propuesto, como ven las Córtes, hacer un cuadro de la

industria establecida ya de antiguo en España, ni manifestar lo que sobra ó le falta, sino únicamente mencionar los ramos nuevos ó recientes de industria en que se ven mejoras efectivas ó señales que las anuncian, tanto en la industria agraria como fabril, de cuyos productos y superabundancias nace forzosamente y se alimenta la comercial. Hablo así en general de toda España, porque hay provincias, como Cataluña, en que pudiera usarse un lenguaje más lisonjero, y en que son claras y muy considerables las creces de la riqueza y de la prosperidad. Lájos, pues, de hallarse los recursos de la Nación en el estado de abatimiento y decadencia que se pondera, por el contrario, crece en general su riqueza, hay anuncios de que crecerá más en lo sucesivo, y España reúne á todos los elementos de la riqueza pública las más fundadas esperanzas de elevarse bajo el régimen constitucional al grado de pujanza y poder que corresponde á la feracidad de su suelo, á lo feliz de su situacion y á las calidades de sus habitantes.

Aplicando estos antecedentes al asunto que actualmente nos ocupa, que es el dictámen presentado por las comisiones de Hacienda y de territorio sobre el arreglo económico del gobierno de las provincias, parece que el estado actual de escasez en que se halla el Erario no debe acobardarnos en los términos que algunos señores Diputados han manifestado. La comision del territorio dijo en su primer informe que creia haber reducido lo posible los gastos del gobierno político, y aun añadió que la disminucion de estos podia en su concepto comprometer el buen desempeño del servicio público. La comision no ha encontrado motivos para mudar de dictámen; pero ha cedido, segun era justo, á la superioridad de luces y autoridad de las Cortes. Como quiera, el establecimiento del gobierno político tiene tanto influjo en la consolidacion del régimen constitucional, que aun los mismos señores que consideraron algun tanto excesivos los gastos, pudieran acaso sin faltar á la prudencia haber despreciado este reparo, en cambio de la seguridad de establecer en la forma conveniente el gobierno político, y de la mayor certeza de los resultados. En fin, las Cortes fallaron, y con presencia de su resolucion presentan las comisiones su nuevo dictámen. En este asunto las Cortes han atendido más bien á la urgencia de las circunstancias, y á la estricta economía que aconseja por ahora el estado del Erario, que á otras consideraciones menos severas; y las comisiones, que han ajustado sus ideas á las de las Cortes, esperan que se servirán aprobar el dictámen que les presentan.

El Sr. **EZPELETA**: Creo que el Sr. Clemencia se acordará de que yo no fui de los que impugnaron el dictámen anterior porque señalase á los empleados sueldos excesivos, sino por todo lo contrario. Ha dicho S. S. que algunos Sres. Diputados, dejándose llevar de su celo, han pintado demasiado exageradamente el estado de miseria de la Nación. Pues yo creo que tambien la comision, dejándose llevar de su celo, ha hecho demasiadas economías; y ateniéndome al artículo para que he pedido la palabra, que es el en que se propone que de la cantidad señalada para gastos se rebajarán 8.000 reales por cada oficial, 4.000 por cada escribiente, y 2.000 por cada portero, digo que creo que los señores de la comision estarán bien convencidos de que la cuota señalada para gastos es tan corta, que si se hacen esas rebajas es imposible que puedan cubrirlos; y así yo ataco el dictámen por demasiado económico, porque esta es una cosa que dentro de seis ú ocho meses será palpable, pues los jefes políticos se verán en la preci-

sion de pasar notas de sus gastos, y harán ver que no alcanzan esas cantidades.

Esta rebaja la hacen los señores de la comision con arreglo á las reflexiones de algunos Sres. Diputados sobre cesantes; pero á mí me ocurre una reflexion. Si á los jefes políticos se les hubiese dejado sin la obligacion de echar mano de esos cesantes, ¿gastarian 8.000 reales en un oficial? Seguramente que no; porque todos los que tenemos algunas haciendas sabemos lo que cuesta un amanuense, con la diferencia de que si el oficial puesto por el jefe político trabajaba como seis, el que le señale el Gobierno trabajará solo como cuatro. Así, yo quisiera que estas economías se hicieran en otros ramos, pero no en el del gobierno político que es la base para que el sistema pueda progresar; y creo que se podrian conciliar las opiniones de todos aprobándose este artículo, pero haciendo que estas rebajas fuesen menores, como por ejemplo, de 6.000 reales por cada oficial, 2.000 por cada escribiente, y 1.500 por cada portero; pues de lo contrario el Gobierno tendrá que venir á las próximas Cortes haciendo presente que los jefes políticos no pueden llenar sus obligaciones.

Así, para poder votar con conocimiento, suplico á los señores de la comision me digan las razones que les han movido á hacer esta rebaja.

El Sr. **VILLA**: Las razones que han tenido las comisiones para hacer esta rebaja de 8.000 reales por cada oficial, 4.000 por cada escribiente y 2.000 por cada portero, son que para señalar la cuota ó asignacion de gastos de cada provincia, han descendido á todos los gastos menores que ocurren en las Secretarías, y han calculado que en las que nombran cinco Diputados, se necesitan tres oficiales, tres escribientes y dos porteros, y les han asignado esas cantidades: por consiguiente, dándoles esas manos, es igual descontarles esos sueldos. Por lo demás, en cuanto á las observaciones que ha hecho el Sr. Ezpeleta sobre que estos empleados nunca podrán merecer la confianza del jefe político como los que él mismo nombre, propone la comision en el último artículo que cuando no merezca su confianza pueda hacerle presente para que el Gobierno determine lo que convenga.

El Sr. **EZPELETA**: No he dicho yo que estos oficiales no merezcan la confianza del jefe político; he dicho que un oficial nombrado por el Gobierno nunca trabajará tanto ni tendrá los miramientos con el jefe político, que el que este nombre y pueda despedirle el día que le acomode.

El Sr. Conde de **TORENO**: Deseo que los señores de la comision digan si han contado con casa para los jefes políticos, y si están seguros de que en todas las capitales de provincia hay edificios para este objeto; porque si no se ha tenido presente, de tantos como hay señalados para la venta, podria destinarse uno á cada jefe y su secretaria.

El Sr. **VILLA**: La comision no se ha ocupado de ese punto, y no sabe si hay ó no casas en las capitales destinadas á ese fin.

El Sr. Conde de **TORENO**: Me parece que la comision no se opondrá á que se haga una adiccion para que donde no haya edificio señalado para este objeto, el Gobierno pueda destinarle.

El Sr. **YANDIOLA**: Debo hacer presente que está prevenido en el decreto de organizacion del Crédito público, por el que se autorizó al Gobierno para exceptuar de la venta los edificios que fuesen útiles para el servicio público; y así, en caso de que no los haya destina-

dos, está facultado el Gobierno por aquel decreto para hacer esa designacion.

El Sr. Conde de **TORENO**: Mi duda es si ese debe entenderse por establecimiento público; y por eso he preguntado si se habia tomado alguna resolucion.»

Sin más discusion quedó aprobado el art. 5.º, como tambien el 6.º y 7.º

En vista de la observacion anterior del Sr. Conde de Toreno, formalizó el Sr. San Miguel la siguiente proposicion como artículo adicional al dictámen precedente, que admitida á discusion se mandó pasar á la comision.

«El Gobierno destinará en cada capital de provincia un edificio proporcionado para situar en él la administracion política, aprovechando á este efecto los edificios que se han aplicado á la Nacion.»

Se leyó otra, presentada por el Sr. Sanchez Salvador, que decia:

«Que los cesantes del Gobierno político que fueren trasladados á otras provincias y no les acomodare servir los empleos, se les considere, aunque sean aptos, como sin ningun derecho á percepcion de sueldo alguno ni á ser colocados en otro ramo.»

En apoyo de esta proposicion, dijo

El Sr. **SANCHEZ SALVADOR**: Me ha parecido conveniente recordar á las Córtes la idea que se ha discutido en el dictámen anterior y está prevenida en el plan administrativo de Hacienda, á saber que los cesantes que fueren llamados á otros empleos, si no les acomoda ir, dejen de percibir su sueldo. Si hay individuos del gobierno político que hallándose en Galicia quiera el Gobierno trasladarlos á Andalucía, y no les acomodase, resultaria el gravámen de que por no convenir á estos individuos la traslacion, habria que pagar á los que desempeñasen aquellos destinos y además á los cesantes. Por tanto, pido que si hay algun individuo á quien el Gobierno piense colocar en otra provincia y lo resiste, desde aquel momento deje de ser empleado, porque no es culpa de la Nacion el que á él le acomode mejor estar en una parte que en otra, ni es justo por eso hacer dobles gastos.»

Admitida á discusion dicha proposicion, se mandó pasar á la misma comision.

Adelantada ya la hora de la sesion, manifestó el señor *Presidente* que se suspendia hasta la inmediata la discusion señalada para este dia del dictámen de las comisiones de Hacienda y de Visita del Crédito público acerca del modo de llevar á efecto el decreto de 29 de Junio último, relativo á la distribucion del medio diezmo é indemnizacion de los partícipes legos, con cuyo motivo presentó el Sr. Lobato la proposicion siguiente, que no se admitió á discusion.

«Para que las Córtes puedan discutir con el debido conocimiento el dictámen de las comisiones de Hacienda y de Visita del Crédito público sobre indemnizacion de poseedores de diezmos legos y dotacion del culto y clero, pido que se pidan á las Secretarías de Gracia y Justicia, Hacienda y Junta nacional del Crédito público cuantos documentos y representaciones de iglesias ó particulares existan en ellas relativas á este asunto, y examinados se manifieste y dé razon de sus contenidos.»

Habiendo presentado la *Secretaría* en forma de de-

creto la contestacion á la consulta del Gobierno sobre la duda propuesta por el mismo para llevar á efecto la recomendacion hecha por las Córtes en el art. 4.º del decreto de 25 de Junio último para la concesion de cruces laureadas de la orden de San Fernando, á los mariscales de campo D. Antonio Quiroga, D. Rafael del Riego, D. Felipe Arco-Aguero, D. Miguel Lopez Baños, D. Demetrio O-Daly, D. Carlos Espinosa, y el brigadier Don Manuel Latre, observó el Sr. *Golfa* que le parecia no deber contestarse en la forma expresada, sino por medio de una orden simplemente, para no dar lugar á creer que las Córtes concedian gracias que no les competian; y quedaron conformes las Córtes en que la *Secretaría* comunicaria la orden en la forma acostumbrada.

Mandóse insertar en el Acta el voto particular de los Sres. Gasco, Palarea, Alaman, Mendez, Muñoz, Priego, Yuste, Navarro (D. Felipe) y La-Llave (D. Pablo), contrario al acuerdo de las Córtes en la declaracion de no haber lugar á votar sobre la proposicion del Sr. Lopez Constante, relativa á que los tenedores de medios lises que los hubiesen presentado en las Casas de Moneda conforme á la ley, no fuesen perjudicados en sus intereses.

Se leyó y quedó sobre la mesa el dictámen de las comisiones de Guerra y Procedimientos, relativo al modo de entregar el proceso á los defensores de los reos del suceso ocurrido en Cádiz el 10 de Marzo de 1820.

Continuó la discusion del Código penal. (Véase el Apéndice al Diario núm. 38, sesion del 1.º de Noviembre; Diario núm. 60, sesion del 23 de idem; Diario núm. 61, sesion del 24 de idem; Diario núm. 62, sesion del 25 de idem; Diario núm. 64, sesion del 27 de idem; Diario número 65, sesion del 28 de idem; Diario núm. 66, sesion del 29 de idem; Diario núm. 67, sesion del 30 de idem; Diario número 68, sesion del 1.º de Diciembre; Diario núm. 69, sesion del 2 de idem; Diario núm. 70, sesion del 3 de idem; Diario núm. 71, sesion del 4 de idem; Diario núm. 73, sesion del 6 de idem; Diario núm. 74, sesion del 7 de idem; Diario núm. 75, sesion del 8 de idem; Diario núm. 77, sesion del 10 de idem; Diario núm. 79, sesion del 12 de idem; Diario núm. 83, sesion del 16 de idem; Diario núm. 84, sesion del 17 de idem; Diario núm. 85, sesion del 18 de idem; Diario núm. 86, sesion del 19 de idem; Diario número 87, sesion del 20 de idem; Diario núm. 88, sesion del 21 de idem; Diario núm. 89, sesion del 22 de idem; Diario núm. 90, sesion del 23 de idem; Diario núm. 91, sesion del 24 de idem; Diario núm. 92, sesion del 26 de idem; Diario núm. 94, sesion del 28 de idem; Diario número 95, sesion del 29 de idem, Diario núm. 96, sesion del 30 de idem; Diario núm. 97, sesion del 31 de idem; Diario núm. 98, sesion del 1.º de Enero; Diario núm. 99, sesion del 2 de idem; Diario núm. 100, sesion del 3 de idem, y Diario núm. 101, sesion del 4 de idem.)

Leído el art. 191 y el encabezamiento que antecede, dijo

El Sr. **CALATRAVA**: La Universidad de Sevilla dice que se define la palabra «conspirar,» como se ha definido la de «conspiracion.» Hay aquí una equivocacion de hecho: la palabra definida en el título prelimi-

nar es la de «conjuracion.» La comision cree que no hay necesidad de definir qué es «conspirar,» porque tiene su significacion conocida en castellano. El Colegio de Cádiz quiere que en vez de «delitos contra la sociedad,» se adopte la division de Bentham, en públicos y semipúblicos, y que se empiece por los privados; añadiendo que no se debe decir «delitos contra el orden político,» como redundante ó muy vago. No comprendo que lo sea, ni la comision cree que hay necesidad de contestar á la objecion sobre el plan, porque ya en otra ocasion ha dicho que no se juzga obligala á conformarse con el de Bentham. La Universidad de Valladolid dice que es redundante el artículo, porque en el hecho de destruirse el Gobierno monárquico ó de reunirse los poderes se destruye la Constitucion: que es además oscuro, porque no se fija ni se entiende bien que es conspiracion de hecho, pues aunque se entienda que es alguna tentativa, halla en el art. 251 que no debe entenderse así, porque en él se declara que la conspiracion seguida de tentativa será castigada como conspiracion de hecho. Aquí hay otra equivocacion material, que es confundir la conspiracion con la conjuracion, cual está ya definida, y suponer que el art. 251 habla de la primera. No es así: allí se propone una excepcion de las reglas generales que tienen ya aprobadas las Córtes en los artículos 6.º y 7.º sobre conjuraciones, proposiciones no aceptadas y tentativas; y no se dice que la conspiracion seguida de tentativa sea castigada como conspiracion de hecho, sino que lo sea la «conjuracion» en ese caso. La conspiracion directa y de hecho no puede existir sin tentativa: la conjuracion puede existir sin ella, y entonces no es castigada como tal conspiracion. El Ateneo, despues de advertir que este capítulo ha previsto casi todos los casos, y que sus observaciones se dirigen más á la redaccion que á la sustancia, halla en el artículo un pleonasma, que dice se evitaria poniendo solamente «alterar, trastornar ó destruir la Constitucion,» é invirtiendo así el orden de estos verbos.

A esto se reducen las observaciones sobre este artículo, en las cuales verán las Córtes que el Sr. Marina padeció equivocacion en decir que alguno de los informantes, y aun me parece que citó al Ateneo español, se oponian á este artículo, porque equiparaba el delito de alterar la Constitucion con el de trastornarla ó destruirla. No hay ningun informante que se oponga á él en este sentido, ni hable de tal cosa; antes bien el Ateneo conviene expresamente con la comision en equiparar tambien estos delitos, como yo creo que deben equipararse para la pena, porque el medio más seguro para destruir ó trastornar nuestra Constitucion, sería empezar por alterarla. Por lo demás, es indiferente que se antepongan ó pospongan algunas palabras, y aun el que se supriman algunas cláusulas del artículo, como comprendidas en la primera. La comision reconoce y ha reconocido siempre, que ciertas expresiones del artículo son en realidad redundantes, y que tienen razon en esto la Universidad de Valladolid y el Ateneo: porque ¿quién ha de desconocer que el que conspira á que se reunan en una sola persona ó corporacion los tres poderes conspira á trastornar ó destruir la Constitucion? Pero el Congreso recordará que este artículo, aunque aprobado por las Córtes anteriores en términos más sencillos, fué propuesto en los que ahora tiene por la comision de Legislacion de la primera legislatura, de acuerdo con el Sr. Marina, y aprobado por las Córtes actuales, porque se creyó que en las circunstancias en que nos hallá-

mos convenia explicarlo mucho, aun incurriendo en algunos pleonasmos, para quitar todo pretesto de dudas é interpretaciones. Mas, pues, ya no se trata de una ley temporal como aquella, sino de un Código, la comision no tiene inconveniente en que se diga: «Cualquiera persona que conspirase directamente y de hecho á trastornar, ó destruir, ó alterar la Constitucion política de la Monarquía española...» (El Ateneo propone que se ponga antes alterar: á la comision le parece más exacto empezar por lo más grave; pero eso es de poca importancia.) «ó el Gobierno monárquico moderado hereditario que la misma Constitucion establece, será perseguido como traidor, y condenada á muerte.» Así, se omite lo de clase y condicion, que no hace falta, y se evitará esta especie de pleonasma, que, repito, no fué desconocido por la comision primera de Legislacion que lo propuso, atendiendo á las circunstancias en que se dió aquella ley.

El Sr. CABARCAS: Me parece que respecto á que la comision está alianada á anteponer la palabra «alterar» á las demás, pudiera decir «alterar, trastornar,» y últimamente «destruir,» porque no hay duda que por este orden se expresan con más exactitud y gradacion las ideas. Para destruir una cosa se empieza primero por alterar; luego se sigue el trastornar, en que se hace más daño, y por último el complemento, que es la destruccion. Así, si la comision no tiene inconveniente, pudiera decirse por este orden.

El Sr. CALATRAVA: Cada uno mira las ideas bajo cierto aspecto. Repito que en esto no hay inconveniente. (El Sr. Cabarcas interrumpió diciendo que solo se dirigia su observacion á la redaccion del artículo.) Pues por lo mismo (continuó el orador), puesto que la comision se allana, no hay motivo para insistir tanto sobre ello; pero creia la comision que la idea, del modo que está en el artículo, se presenta bajo un orden más natural, empezando por los grados ó delitos más graves, porque no me suena bien que se principie por el más leve para imponerle la misma pena que á otros de mayor gravedad que le siguen. El artículo presenta primero el delito principal, el de trastornar ó destruir, y luego añade que aunque no se trastorne ni destruya, solo el alterar basta para incurrir en la misma pena. Si se empieza por el de alterar será inútil añadir lo otro. Pero sin embargo, la comision no tiene dificultad en ponerlo como se quiera.»

Declarado el punto discutido, quedó aprobado el artículo en estos términos: «Toda persona de cualquiera clase que conspirare directamente y de hecho á trastornar, ó destruir, ó alterar la Constitucion política de la Monarquía española, ó el gobierno monárquico moderado hereditario que la misma Constitucion establece, será perseguida como traidor y condenada á muerte.»

Se leyó el 192, redactado en estos términos: «Cualquiera que impidiere ó conspirare directamente y de hecho á impedir la celebracion de las Córtes ordinarias ó extraordinarias en las épocas y casos señalados por la Constitucion, es tambien traidor, y sufrirá la pena de muerte.»

En seguida dijo

El Sr. CALATRAVA: No hay más objecion que la que hace el Ateneo, diciendo que este y los dos siguientes artículos se pueden omitir, porque los considera comprendidos en el anterior, y porque están expresos en la Constitucion. Las Córtes, sin embargo, conocerán la necesidad ó la conveniencia de expresarlos aquí, porque ni lo relativo á la diputacion permanente está tan terminante en la Constitucion, ni aunque lo esté lo de las

Córtes nos releva de especificar aquí la pena del traidor; y yo creo, además, que todas las que hayan de imponerse á los delitos deben expresarse en el Código penal, aunque lo estén también en la Constitución, ó que á lo menos debe hacerse aquí alguna remision especial á los artículos de ella. Son muchas las disposiciones constitucionales que están reproducidas en otras leyes y decretos.»

Aprobado este artículo, dijo sobre el 193

El Sr. **CALATRAVA**: No hay objecion alguna contra este artículo, y hé aquí cómo la opinion que acerca de él ha manifestado el Sr. Marina no es apoyada tampoco por ninguno de los informantes, porque todos ellos han conocido muy bien, sin duda, que no interesa menos á la libertad nacional la conservacion de la diputacion permanente que la de las mismas Córtes. Acaso corresponde imponer esta pena á los que traten de disolver la diputacion permanente, ó impedirle sus funciones, con mas razon que á los que intenten esto mismo respecto de las Córtes, porque es más expuesto ó más fácil que se cometa este atentado contra la diputacion permanente, la cual no tiene la fuerza fisica ni moral que el Congreso. Es una autoridad desvalida, una centinela que vela sobre el campo de la libertad, un resúmen, por decirlo así, de las mismas Córtes, y si se la ataca, Córtes y libertad, todo puede ser destruido.»

Aprobado este artículo, lo fué igualmente el 194, sobre el cual dijo el Sr. *Calatrava* que no habia observacion alguna.

Leyóse el 195, diciendo

El Sr. **CALATRAVA**: El Colegio de Cádiz, la Universidad y la Audiencia de Sevilla, proponen que se establezca la pena en este Código. El Colegio de Barcelona dice que el primer párrafo toca al Código de procedimientos. La comision cree que no, porque nada tiene que ver con los procedimientos el que las Córtes y la diputacion usen de esta facultad, la cual conviene que se declare aquí como parte de la pena. El Tribunal Supremo de Justicia opina también que debe expresarse la pena en este Código, como su propio lugar, sin perjuicio de que se prescriba también en el Reglamento interior. El fiscal de la Audiencia de Mallorca dice que no se especifican los delitos de falta de respeto á las Córtes y á la diputacion permanente. Y por último, el Ateneo es igualmente de opinion de que se exprese aquí la pena, y propone la de uno á tres años de prision, con una multa de 20 á 50 duros; añadiendo que se dé un orden inverso á este artículo, de manera que diga: «El que turbe el orden ó falte al respeto, etcétera, será arrestado en virtud de decreto de las mismas Córtes ó de la diputacion, las cuales harán entregar, etc.»

En cuanto á esto último, la comision cree que no hay necesidad de variar la parte respectiva del artículo. Aquí lo que conviene es decir que las Córtes y la diputacion podrán por sí decretar el arresto, entregando el arrestado al juez competente dentro de las cuarenta y ocho horas, sin que esto obste para que cualquiera otra autoridad, si pudiere, arreste al delincuente, como obstaria si se concibiese el artículo en los términos que propone el Ateneo. En cuanto á la pena del delito, la comision se remite al Reglamento interior de las Córtes, porque esta pena deberá ser mayor ó menor segun las circunstancias, y la mayor ó menor frecuencia y gravedad que se note en los abusos. No es cierto, sin embargo, que en este Código no se señale pena ninguna á este delito; y para convencerse bastará leer la última

parte del artículo, que dice que en defecto del Reglamento «se arreglará (la pena) á las disposiciones de este Código.» Los Sres. Diputados habrán visto que en los artículos posteriores se señalan penas, aunque no tan graves como las que propone el Ateneo, contra los que faltan al respeto á las autoridades, y estas penas serán las que deban aplicarse en los casos del presente artículo, si el Reglamento no prescribe otras. Con todo, si las Córtes creyesen que se debe señalar aquí una pena especial, la comision no tendrá inconveniente en que se adopte la que propone el Ateneo, ó cualquiera otra que se estime más justa; pareciéndole que no se puede especificar más el delito de faltar al respeto á las Córtes ó á la diputacion que lo que se expresa en cuanto á las demás autoridades en el art. 335 y siguientes.

El Sr. **SAN MIGUEL**: Voy á hablar contra este artículo en el mismo sentido que hablan algunos de los informantes, y en su consecuencia digo que echo menos que no se designe la pena en que incurre el que falta al respeto á las Córtes ó á la diputacion permanente, ó interrumpe el orden y tranquilidad de sus sesiones. El Código penal debe comprender todas aquellas cosas cuyo conocimiento interesa al comun de los ciudadanos. Del Reglamento interior de Córtes se ha dicho aquí con otro motivo muy justo que bastaba su denominacion para dar á entender que su conocimiento no interesa á la totalidad de la Nacion; y por consiguiente, siendo este Código la reunion de todas las penas que corresponden á los delitos, entiendo que póngase ó no se ponga la de que se trata en el Reglamento interior de Córtes, aquí corresponde expresarse.

La razon que ha alegado el Sr. Calatrava acerca de que esta pena no se establece aquí porque los delitos de esta clase no pueden comprenderse todos bajo una medida fija, porque serán susceptibles de una gran modificacion en razon de las circunstancias, me parece que no es bastante poderosa para que no se exprese aquí la pena, estableciendo la escala del máximo y del mínimo que se ha propuesto para otros delitos. De este modo tendrá este Código toda la integridad que corresponde, y el comun de los ciudadanos, á quienes les importa saber tanto sus deberes como las penas en que incurren si faltan á ellos, no tendrán que irlos á estudiar en otro libro.

El Sr. **CALATRAVA**: Hay, repito, una equivocacion en creer que este Código no señala pena. El artículo dice en su segundo párrafo. (*Lo leyó.*) En efecto, en este Código se halla impuesta una pena contra el que falta al respeto debido á una autoridad pública cuando se halla reunida; y para que el Sr. San Miguel quede satisfecho, leeré el art. 335. (*Lo leyó.*) Si se quiere que se añada en el que se discute que la pena se arreglará á las disposiciones del que acabo de leer, enhorabuena: la comision ha contado con que en caso de que las Córtes no tuviesen por conveniente agravar la pena en su Reglamento interior, tomando en consideracion las circunstancias, siempre habria lugar á imponer la del artículo 335. Más no obstante, si esta pareciera corta á las Córtes, y creyesen más proporcionada la que propone el Ateneo de uno á tres años de prision con multa, la comision está conforme; pero siempre cree que conviene que se deje el arbitrio de aumentarla ó disminuirla en el Reglamento interior por la razon expresada.

El Sr. **ECHEVERRÍA**: Yo no puedo menos de adherirme á la opinion que ha manifestado el Sr. San Miguel, porque creo que no es propio del Reglamento interior de Córtes hablar de otra cosa que de lo puramen-

te gubernativo y económico. Aquí se trata de una verdadera infracción de ley, cual es el faltar al respeto de las Cortes y de la diputación permanente, turbar ó interrumpir sus sesiones. Si estos delitos se hubiesen de juzgar por el tribunal de Cortes, podría muy bien este acudir para la pena al Reglamento interior de las mismas; pero debiéndose hacer por los tribunales ordinarios, ¿cómo han de acudir estos á un Reglamento particular é interior como el de las Cortes? En fin, si este artículo se refiriese á las disposiciones generales del 335, podría pasar, aunque yo sería siempre de opinión de que así como se designa en este Código pena particular contra los que faltan al respeto al Rey, se designe también una especial contra los que faltan al del Cuerpo legislativo. Nada se pierde, en mi concepto, en que la comisión especifique la pena que tenga por conveniente.

El Sr. **CALATRAVA**: Me parece excusado contestar al Sr. Echeverría lo mismo que contesté al Sr. San Miguel. Ha dicho S. S. que cómo los jueces han de venir á buscar en el Reglamento interior la pena de un delito. Mas por ventura, ¿el Reglamento interior de Cortes no es una ley? ¿No se publica como tal? ¿No se comunica á los tribunales y deben saberlo como las demás leyes?

Repito por la tercera vez que la comisión propone pena en este Código para en el caso de que no señale otra especial el Reglamento. A las Cortes toca el decidir si la tienen por proporcionada, ó si quieren que se aumente ó se disminuya, y si solo se ha de señalar en el Código ó ha de poder prescribirse otra en el Reglamento, el cual vuelvo á decir que indisputablemente es una ley para el caso, como lo manifiesta la fórmula y la solemnidad con que se publica y circula.

El Sr. **SAN MIGUEL**: Si en el art. 335 de este Código se establece la pena de que se trata, no tengo nada que añadir, pues no lo tenía presente. Yo bien sé que el Reglamento interior de Cortes es una ley; pero es una ley que no está al conocimiento del total de los ciudadanos, porque sus disposiciones se supone que interesan inmediatamente á los Diputados, y por lo mismo me parece que no es este el lugar propio para establecer una disposición penal sobre delitos ó excesos, que deben conocer todos para que sepan el castigo que merecen.

El Sr. **MARIN TAUSTE**: En este artículo se dice que las Cortes están facultadas para decretar el arresto de cualquiera que turbe el libre ejercicio de sus funciones, etc. Yo creo que estaría mejor que se dijese que el Presidente de las Cortes ó de la diputación permanente ejerciese esta facultad. Porque ó la intención de la comisión ha sido que la tenga el Presidente, ó el Cuerpo legislativo: si lo primero, me parece que sería bueno expresarlo para quitar toda duda: si lo segundo, yo hallo un grande embarazo, porque para ello deberían ocuparse las Cortes en una discusión previa, y formar un acuerdo para decretar el arresto. Además, si el Presidente de las Cortes tiene facultad para establecer el orden por sí, y hacer presentar en la barra á cualquiera Diputado que se exceda, con mucha más razón debe tener facultad para reprimir el desorden que cometa contra el Cuerpo legislativo cualquiera ciudadano.

Así, pues, si los señores de la comisión no tienen inconveniente, podría decirse en el artículo que el Presidente tiene esta facultad.

El Sr. **CALATRAVA**: La comisión encuentra muchos inconvenientes en que la ley dé esta facultad al Presidente; porque no puede reconocer como autoridad

sino á las Cortes y á la diputación permanente. Si las Cortes en su Reglamento quieren prescribir que ejercerán esta facultad por medio del Presidente, en hora buena; pero en caso que ocurra este delito, creo yo que las Cortes no ejercerán nunca la facultad por sí en cuerpo: ya se sabe que en virtud de su acuerdo, ó en nombre de ellas, lo hará el Presidente, como lo haría hoy si se ofreciera.

El Sr. **GARELI**: He tomado la palabra en apoyo del artículo, porque me parece que está bien extendido, y muy en su lugar.

Hasta ahora, los que turbasen el orden de las sesiones sufrían únicamente el castigo de ser expelidos de la galería en el acto; y si la falta fuese mayor, se debía, dice el Reglamento, tomar la providencia á que hubiese lugar. Esto era demasíadamente vago y suave: el artículo que se discute está más contraído, y amplía la pena, como es muy justo.

Pero como en esta clase de excesos se puede incurrir desde una falta de educación hasta los más graves delitos, la comisión sabiamente se remite á las reformas del Reglamento interior de Cortes que exija con el tiempo la experiencia »

Discutido suficientemente el art. 195, quedó aprobado. Se leyó el 196, y dijo

El Sr. **CALATRAVA**: Algunos de los informantes han notado una errata que resulta en los ejemplares impresos, los cuales dicen *abrogare* en lugar de *arrogare*. Esto ha sido efecto de la prisa con que se copió é imprimió el proyecto, sin que la comisión hubiese tenido tiempo para corregir por sí la copia y las pruebas. La Audiencia de Sevilla propone que se señale diferente pena á la ignorancia ó descuido que á la malicia. La comisión cree que aquí no cabe ignorancia ni descuido, ó que no debe darse lugar á estos pretextos, porque no puede menos de suponerse que todo el que se arrogue algunas de las facultades de las Cortes lo hará con malicia. La Audiencia de Extremadura dice que la generalidad del artículo puede producir inconvenientes, que se evitarían acaso, añadiendo *maliciosamente y á sabiendas*; en cuya adición conviene también el fiscal de la de Mallorca. La comisión repite, que no cree que pueda nadie arrogarse las facultades de las Cortes, sin que sea maliciosamente y á sabiendas; no hay ignorancia ni descuido que pueda disculpar esta acción; pero sin embargo, si alguno que la cometiere hace ver lo contrario, se le aplicarán los principios ó reglas que determinan lo que constituye el delito y la culpa.

El Sr. **PUIGBLANCH**: Me parece que mediante á que en el día la ley prohíbe á un sujeto el poder obtener más de un empleo, estaría mejor el artículo si hablando en singular, dijese «perderá el empleo, etc.»

El Sr. **CALATRAVA**: Lo que la ley prohíbe es disfrutar dos sueldos; pero no prohíbe el tener dos ó más empleos, como muchos los tienen.»

Sin mas discusión quedó aprobado este artículo, así como el 197, 198 y 199, sobre los cuales manifestó el Sr. Calatrava no haberse hecho observación alguna. Leído el art. 200, dijo el mismo señor que no había tampoco observación alguna que hacer.

El Sr. **GIL DE LINARES**: Me parece que podría añadirse, además de «autoridad,» «cualquiera persona,» porque lo que no pueda hacer una autoridad, podrá hacerlo una persona.

El Sr. **CALATRAVA**: Una persona que no es autoridad, cometerá en tal caso una violencia, que es delito diferente, y su persecución nunca tendrá el carácter

ter ni los efectos que la que haga una autoridad. La Constitucion no habla de personas, sino de autoridades, por la razon expresada.»

Aprobado este artículo, se leyó el 201, diciendo

El Sr. **CALATRAVA**: No hay mas observacion que la del Colegio de Cádiz, el cual dice que este artículo no le parece conforme con el 192. Las Córtes pueden ver cuán diferente es un artículo de otro, y cuán fácil es que se impida que uno ó más Diputados se presenten en las Córtes, sin que por esto se impida ni se intente impedir la reunion del Congreso.»

Se aprobó este artículo, y se leyó el 202, diciendo despues

El Sr. **CALATRAVA**: La Audiencia de Sevilla pide mayor explicacion, y la Universidad de Valladolid dice que se exprese cuáles son los ascensos de escala. No sé en qué se fundan ciertas dudas. La comision cree que no hay necesidad de mayor explicacion. La Constitucion, de la cual está copiado á la letra lo principal de este artículo, no la da tampoco, sin duda por considerarlo excusado, como lo es en efecto.

El Sr. **MORENO**: Yo de ninguna manera me puedo oponer á este artículo, porque puntualmente es el que hace más honor al Congreso, al Código y á la Nacion; solamente quiero hacer presente, que así como al

Príncipe del Poder ejecutivo se le supone impecable, á los Principes del Poder legislativo, que son los Diputados, en la opinion pública pueden suponerse impecables. Quisiera, pues, que este artículo perteneciera al Reglamento interior de Córtes, así como está allí todo lo perteneciente á los delitos que pueden cometer los Diputados sobre la libertad de imprenta.

El Sr. **CALATRAVA**: La comision no tiene inconveniente por su parte; pero ha creido y cree que este artículo está en su lugar. Lo que contiene se halla prescrito en la Constitucion: se trata de un delito y de una pena, y parece que debe comprenderlos el Código, que está más á la vista que el Reglamento interior de Córtes.»

Sin que se hubiese hecho ninguna otra observacion se aprobó el art. 202, y se suspendió esta discusion.

Anunció el Sr. *Presidente* que en el dia inmediato, á primera hora, se trataria del dictámen que acaba de leerse, del de las comisiones de Hacienda y Visita del Crédito público, de que queda hecha mencion, siguiendo despues la discusion del Código penal.

Se levantó la sesion.